

“El que a hierro mata” ... Aprendizajes de Aratirí

■ Por Andrés Gil Petersen, economista y periodista

Apenas iniciado agosto llegó la noticia. Un balde de agua fría para el gobierno. Un balde de nafta para el ya encendido debate político nacional. Un bálsamo para los detractores de la iniciativa. La mayor inversión en la historia del país, el proyecto minero “Aratirí” de extracción de hierro a cielo abierto, había quedado *stand by*.

La indefinición y los vaivenes de las autoridades. La falta de consenso en la interna del partido de gobierno. Los “cacareos” (según palabras de la Primera Dama) de una oposición que tampoco conseguía acuerdos internos muy claros al respecto. La espada de Damocles del “referéndum consultivo”. La inflexible oposición de los productores y habitantes de la zona. Los reclamos altisonantes ante la falta de un “estudio serio del impacto ambiental”, siempre bien azuzados por las profecías de los políticos agoreros del apocalipsis ecológico: se avecina la lluvia ácida, la contaminación irreparable de las napas freáticas y del valioso sistema hídrico nacional. Grupos de activistas alertando sobre los efectos nocivos del proyecto sobre el patrimonio cultural, el daño evidente que la iniciativa tendría sobre la industria turística del país y ¡hasta reclamando un estudio de impacto arqueológico! Un verdadero aquelarre que incluyó planteos sobre la necesidad imperiosa de nacionalizar el hierro y la demanda surrealista de que sea el Estado uruguayo quien asuma la explotación del mineral, sin considerar la absoluta incapacidad técnica del país entero –ya no del Estado uruguayo– para hacerse cargo de un proyecto de este tipo. Claramente, el debate dio para todo.

El resultado era más o menos esperable. Los capitales indios “bajaron 3 cambios” y sacaron el pie del acelerador sobre el que venían parados después que recibieron el visto bueno del Estado para avanzar en sus tareas de prospección hace un año y medio. Llevaron de 1 a 4 en la interna del grupo la prioridad del proyecto y los fondos destinados al mismo fueron reasignados a alguna otra iniciativa ubicada en algún otro país del mundo con una institucionalidad un poco más descifrable.

Hay ahí –en las señales emitidas por nuestra institucionalidad– un punto sobre el que vale reflexionar. No se trata de estar a favor o en contra de este proyecto o de la minería a cielo abierto en términos generales. Menos aún de aportar luz a la vidriosa discusión sobre los eventuales efectos contaminantes de esta actividad. Tampoco de laudarse el debate respecto de si resultaría conveniente –en una perspectiva de largo plazo– el avance de una iniciativa como la de Aratirí en territorio nacional. Mal favor le haríamos al estado de las cosas aportando un poco más de amateurismo a la discusión. Aquí el punto es otro.

El economista Antonio Elías escribió a fines de la década pasada un libro con un enfoque neoinstitucional de la realidad del Uruguay. Eligió titularlo “El país de los cambios económicos graduales” (TRILCE, 1999). ¿Qué es un proyecto como el de Aratirí, con un impacto superlativo en la matriz productiva del país, si no un “cambio económico” de carácter estructural? Al Uruguay le ha costado y le sigue costando esto de procesar cambios. Lo nuevo se mira de reojo, con “siete lupas”. Y esta lógica sistemáticamente suele derivar en aterrizajes exageradamente suaves, en aproximaciones pasmosamente graduales a esas realidades novedosas que amenazan el *status quo*. Así, no fue esta la primera vez que esos tiempos entran en contradicción con “los tiempos del capital privado”. Y no se trata solamente del “tiempo calendario” sino del uso que se le da al mismo. En general, estos procesos de discusión cuentan con una participación desproporcionada del sistema político y de los “activistas” de turno, quedando relegada, postergada, la evaluación técnica, profesional. Y la calidad del debate asusta a cualquiera.

Detengámonos un instante en la referencia a las “señales emitidas por nuestra institucionalidad”. A diferencia de los economistas clásicos, para los cuales el problema económico central es el de la asignación de recursos y la distribución del ingreso, los teóricos de la economía

institucional dan mayor relevancia al estudio de los problemas de organización, y a cómo las instituciones y las relaciones de poder determinan la estructura de incentivos que subyace a la dinámica económica. Uno de los principales teóricos de esta corriente, Douglas North, definió las instituciones como *“las reglas de juego en una sociedad, constituidas por condicionamientos formales (leyes, reglas), por condicionamientos informales (normas de conducta, códigos de comportamiento, convenciones) y por sus respectivos poderes de coacción”*. Son estas reglas y la interrelación entre las organizaciones políticas, económicas y sociales las que determinan los denominados “costos de transacción” asociados a cualquier acción o contrato económico. Y es en función de esos costos –y de la búsqueda de su optimización– que, según este enfoque, se define la asignación de los recursos.

Ese entramado de “instituciones” y la forma peculiar en que está repartido en nuestra sociedad el “poder de coacción” que señala North, muchas veces termina por ser un obstáculo a la asignación óptima de los recursos y al propio desarrollo del país. Mirando más allá de este caso puntual de Aratirí vale recordar, por ejemplo, las turbulencias generadas por el desembarco de la producción de pasta de celulosa en el país. Solo la estridencia de la posición argentina logró acallar el debate local, generando una cierta homogeneización artificial de posturas al interior del país. De no haber mediado el “efecto piquetero” quizás todavía estaría deliberando alguna comisión multipartidaria como la que el presidente convocó –de forma tardía, esencialmente reactiva y con un sesgo no-técnico preocupante– para considerar el asunto de la explotación del hierro. BOTNIA (hoy UPM) resistió el temporal; otras empresas del mismo rubro no lo hicieron y abandonaron el país o postergaron sus inversiones. Consideraciones similares podrían hacerse respecto de la instalación de plantas chipeadoras, puentes multipropósito, hasta molinos de viento para generar energía eléctrica (!) en diferentes zonas del país; esto si solo nos ceñimos a inversiones de gran magnitud frustradas o postergadas en los últimos años.

¿Está mal acaso que el país entero discuta larga y acaloradamente sobre cada iniciativa “novedosa”, dando espacio en el debate a todo aquel que entienda que sus intereses pueden ser mínimamente afectados por

cada “cambio económico”, por cada paso hacia el “desarrollo” que el país se disponga a dar? Quizás no esté mal y hable de nuestra bien conservada cultura democrática. Pero es importante tener presente que esos procesos llevan implícitos ciertos costos, y que el riesgo de ir generando un estigma de país “complicado” para dar cabida a emprendimientos novedosos, existe. Así, puede llegar el punto en que esa –bien ganada– “marca” de país respetuoso de la inversión privada termine eclipsada por otra marca: la de un país conservador, en el que los “costos de transacción” asociados al desarrollo de proyectos que salgan a la matriz productiva tradicional son demasiado altos.

Justamente por eso, el Estado debe actuar de forma más proactiva frente a estos impulsos externos. Está claro que hoy en día no existen en el país las habilidades necesarias para hacer una evaluación completa, seria, profesional y ejecutiva (lo más importante de todo) de un proyecto de la envergadura de Aratirí. Quizás la capacitación en estos asuntos debió haber empezado antes; estando ahí el recurso natural y con solo observar con atención las tendencias mundiales, era dable esperar que en cualquier momento surgiera alguien dispuesto a explotarlo.

Finalmente, otro de los cuestionamientos que se pudo escuchar en este debate es que no estamos preparados para un emprendimiento así, por ejemplo porque UTE no podría abastecer de energía a una instalación de este porte. Pues mal por UTE, mal por el país. Otro llamado a trabajar de forma proactiva, porque he ahí otra variable que termina por definir la llegada de inversiones al país. Acceso a energía suficiente y a costos razonables, conectividad a internet acorde a los estándares internacionales, infraestructura vial, transporte, puertos y, claro, recursos humanos competentes. En la carrera por captar la inversión mundial los procesos deben ser necesariamente de mejora continua. Ya no alcanza con ser “respetuoso” del capital, también hay que ser amigable con el inversor y –por sobre todas las cosas– eficiente, ejecutivo y consistente a la hora de las señales. 🤖

